



Suprema Corte de Justicia
Provincia de Buenos Aires

I-79547



AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS
S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE
AVELLANEDA S/
INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 143
DE LA ORDENANZA IMPOSITIVA

AUTOS Y VISTOS:

I. Se presenta Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (en adelante, AySA S.A.) por intermedio de su apoderado, promoviendo demanda originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y conchs. del Código Procesal Civil y Comercial, contra la Municipalidad de Avellaneda, con el objeto de que esta Corte declare la inconstitucionalidad del art. 143 de la ordenanza 30.645 (impositiva para el año 2024) de esa comuna.

Expone que tal norma delega facultades al Departamento Ejecutivo que, en su ejercicio, dispuso un aumento en la Tasa por Servicios Generales (en adelante, TSG), calculándola sobre los "ingresos brutos" o el monto emergente de la "facturación emitida" por AySA.

Manifiesta que ese incremento fue decidido en contradicción con la regla general aplicable para de ese tributo que,



Suprema Corte de Justicia
Provincia de Buenos Aires

I-79547

conforme la Ordenanza Fiscal municipal, debe calcularse tomando como base imponible la valuación fiscal de los inmuebles de titularidad del contribuyente. Destaca que tal aumento en el tributo refleja el registrado en la tarifa que la comuna debe abonar a AySA por la prestación de los servicios a su cargo, que fue establecido conforme al Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias (disposición 45/2010 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación).

Expone que, siendo ello así, la TSG se incrementó exponencialmente. Para graficar este punto ofrece la comparación entre la liquidación del tributo correspondiente al período 4-2024 -que ascendía a \$856.802.926- y la del período 05-2024 -que fue emitida por \$ 1.939.305.718-.

Sostiene que la consideración de los ingresos brutos, ingresos totales o facturación efectuada por la empresa como base para la fijación de las sumas adeudadas incumple con la prohibición en ese sentido dispuesta por el art. 10 de la ley 10.599 —de coparticipación provincial—.

Señala que, dado lo anterior, en el caso se violentan de modo directo los arts. 5, 31 y 123 de la Constitución nacional y los arts. 1, 11, 31, 56, 57, 190, 191, 192, 193 y 195 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.



Suprema Corte de Justicia
Provincia de Buenos Aires

I-79547

Asimismo solicita que, con carácter cautelar, se ordene a la comuna abstenerse de ejecutar la tasa en cuestión en cuanto esté liquidada conforme lo dispuesto en el precepto que señala como inconstitucional.

Al fundar tal petición, explica que la aplicación del tributo en las condiciones denunciadas supone una erosión a sus recursos, una disminución de sus ingresos y la absorción de los subsidios que recibe del Estado nacional para financiar la ayuda social que debe ofrecer para garantizar el acceso generalizado a los servicios que brinda.

Puntualiza que "actualmente el Estado Nacional subsidia el servicio prestado por AySA a más del 40 % de los usuarios" y que la magnitud actual de la carga tributaria municipal implica la captación por la demandada de esos fondos públicos del Estado nacional que tienen un destino específico diverso.

Pone de resalto que la actividad que desarrolla consiste en la prestación de un servicio público esencial que incide en las condiciones de vida de las quince millones de personas a las que abastece.

Manifiesta que la concesión de la medida precautoria solicitada no afectará el interés público sino que, por el contrario, garantiza su satisfacción en cuanto a la prestación del servicio esencial de provisión de agua potable y saneamiento. Subraya que los aumentos



Suprema Corte de Justicia
Provincia de Buenos Aires

I-79547

en la tasa cuestionada "en última instancia, encarecerán el servicio prestado a los usuarios pues, irremediablemente, AySA deberá trasladar dichos aumentos a costos, siempre y cuando obtenga la autorización por parte del ERAS" [refiere a Ente Regulador de Agua y Saneamiento] (v. presentación electrónica de fecha 11-VII-2024).

II. Mediante presentación electrónica de fecha 17-VIII-2024, la actora denuncia que la Municipalidad de Avellaneda inició un proceso de apremio en su contra, con el objeto de cobrar compulsivamente la TSG por los períodos 12-2023 y 01-2024, correspondiente al padrón 385.078, en cuyo marco trabó un embargo en una cuenta bancaria de su titularidad por pesos un mil cuatrocientos sesenta y tres mil millones cuatrocientos treinta y cinco mil seiscientos catorce con 70/100 (\$ 1.463.435.614,70). Describe que el tributo ejecutado fue liquidado según las pautas fijadas con aplicación por la comuna del impugnado art. 143 de la ordenanza 30.645.

Reitera en parte los fundamentos que expuso al requerir la medida cautelar en el respectivo acápite del escrito de demanda y adiciona que la actual situación impide continuar con obras de mejora y expansión del servicio a su cargo. Subraya también que, de no concederse la medida peticionada, avanzará la demandada con la ejecución de los períodos 2 a 8-2024, cuya liquidación asciende a la suma de doce mil ciento setenta y nueve millones docientos ochenta y



Suprema Corte de Justicia
Provincia de Buenos Aires

I-79547

siete mil cincuenta y tres con 6/100 pesos (\$12.179.287.053,06).

III. Finalmente, mediante presentación electrónica de fecha 20-VIII-2024, AySA denuncia haber tomado conocimiento de un nuevo incremento en la tasa en cuestión por aplicación de lo previsto en el art. 143 de la ordenanza 30.645. Precisa que tal modificación se dio respecto del mismo inmueble y por el período 8/2024.

IV.1. En torno a la tutela precautoria requerida, en esta etapa liminar debe puntualizarse que merece especial atención el carácter esencial del servicio público de provisión de agua potable y desagües cloacales que se encuentra a cargo de la demandante (art. 6, ley 26.221 y 1, decreto nacional 304/06).

Así, no puede pasar inadvertido que tales servicios se vinculan especialmente con el goce de los derechos al agua y a la salud, en sus dimensiones individual y colectiva.

Ambos derechos fueron previstos como tales en normas constitucionales, leyes, tratados internacionales y decisiones de organismos de esa misma naturaleza que le han encomendado a los Estados la protección de tales garantías (conf. arts. 75 inc. 22, Const. nac.; 28, tercer párr. y 36 inc. 8 Const. prov.; 1, ley 14.782; 11 y 12, Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; 14 inc. 2 apdo. "h", Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; art. 24 inc. "c" apdo. "c", Convención



Suprema Corte de Justicia
Provincia de Buenos Aires

I-79547

sobre los Derechos del Niño; 11, Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Observación General N° 15 del Comité D.E.S.C. de las Naciones Unidas y resolución A/RES/64/292 del CDH de las Naciones Unidas). A la vez que merecieron especial reconocimiento por este Tribunal (doctr. causas Ac. 65.643, sent. 3-X-2004, Ac. 82.843, sent. de 30-III-2005; A. 69.021, "Utilducto S.A.", sent. de 8-VII-2008; C. 89.298, "Boragina", sent. de 15-VII-2009; A. 71.263, "Florit", sent. de 25-IV-2012; A. 78.050, "Fernández Urricelqui", sent. de 24-IX-2024) así como por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, Fallos: 337:1361).

Se suma a lo anterior la singular circunstancia de tratarse la firma actora de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria —en tanto el 90% de sus acciones son de titularidad del Estado Nacional (art. 2, decreto 304/2006)—, circunstancia que conduce -para determinados efectos- a su consideración como una forma de descentralización de la administración nacional (arg. doctr. causas B. 65.834, "De.U.Co", resol. de 7-V-2008, A. 70.011, "Conde", resol de 10-XI-2010; A. 71.263, cit.; A. 73.761, "ABSA", resol. de 12-VIII-2015 y A. 78.263, "Unipar Indupa", resol. de 20-III-2023).

Frente a ese panorama, se considera menester recabar más elementos de juicio que permitan al Tribunal evaluar acabadamente las



Suprema Corte de Justicia
Provincia de Buenos Aires

I-79547

peticiones, pues algunos puntos que se estiman relevantes no surgen de la documentación obrante al momento en la causa. De modo tal que la mejor protección de los derechos invocados amerita la disposición de ciertas medidas necesarias para arrimarlos al proceso.

IV.2. Así pues, con suspensión del traslado de la demanda dispuesto en fecha 29-VII-2024, como medida para mejor proveer (conf. art. 36 inc. 2, CPCC), se deberá:

i. Librar oficio a la Municipalidad de Avellaneda para que, dentro de los cinco (5) días de recibido, informe al Tribunal acerca de los siguientes puntos:

a. El mecanismo de liquidación de la TSG para las empresas prestadoras de servicios públicos, precisando la composición de la base de cálculo y el alcance de su aplicación respecto de todas las firmas prestadoras de servicios de esa naturaleza radicadas en su jurisdicción.

b. La base imponible considerada para la liquidación de la TSG correspondiente a la actora en las liquidaciones correspondientes al mes 12-2023 y las emitidas hasta la fecha durante el año 2024.

c. Los aumentos registrados en la TSG a cargo de la demandante en el período comprendido entre el mes 12-2023 y la fecha de elaboración del informe, indicando el padrón al que corresponde y expresando cada incremento también en porcentajes respecto de la liquidación inmediata anterior.



Suprema Corte de Justicia
Provincia de Buenos Aires

I-79547

d. El procedimiento mediante el cual fueron decididos e implementados los aumentos de la Tasa por Servicios Generales aplicados para el mes de 12-2023 y hasta la fecha de elaboración de su informe. Además, deberá informar puntualmente si el art. 143 de la ordenanza 30.645/2024 fue sancionado mediando intervención de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes.

ii. Librar oficio al Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) para que, dentro de los cinco (5) días de recibido, informe a esta Suprema Corte sobre los siguientes ítems:

a. Los aumentos autorizados para las tarifas exigibles por AySA a la Municipalidad de Avellaneda durante el período comprendido entre el mes 12-2023 y la fecha de emisión del informe, expresándolos especialmente en porcentajes respecto de la liquidación inmediata anterior.

b. Las sumas concretamente liquidadas por AySA a la Municipalidad de Avellaneda por la prestación de los servicios a su cargo, detallando los aumentos aplicados durante el lapso transcurrido entre el mes 12-2023 y la fecha de emisión del informe, expresándolos especialmente en porcentajes.

V. En este particular contexto, frente a la potencialidad de un riesgo objetivo de afectación a la normal prestación del servicio público de provisión de agua potable y desagües cloacales en la comuna



Suprema Corte de Justicia
Provincia de Buenos Aires

I-79547

demandada y la particular conformación de la firma actora, corresponde ordenar a la demandada que, hasta tanto se brinde la información requerida y este Tribunal se pronuncie en autos acerca de la tutela preventiva solicitada, suspenda el cobro de todo aumento en la liquidación de la Tasa por Servicios Generales que se hubiese aplicado durante el año 2024 o fuera a aplicarse en el futuro como consecuencia del ejercicio por el Departamento Ejecutivo de la atribución prevista en el art. 143 de la ordenanza 30.645 (arts. 195, 199, 230, 232, CPCC).

Esto último, bajo caución juratoria de la parte actora de responder por los daños y perjuicios que la medida dispuesta pudiera ocasionar (art. 199, CPCC).

Por ello, la Suprema Corte de Justicia

RESUELVE:

I. Como medida para mejor proveer (art. 36 inc. 2, CPCC), oficiar por Secretaría a la Municipalidad de Avellaneda y al Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) para que, dentro de los cinco (5) días de recibido, informen al Tribunal acerca de los ítems especificados en los puntos IV.2.i y IV.2.ii de la presente resolución, respectivamente.

II. Ordenar a la demandada que, hasta tanto se brinde la información requerida y este Tribunal se pronuncie en autos acerca de la tutela preventiva solicitada, suspenda el cobro de todo aumento en la



*Suprema Corte de Justicia
Provincia de Buenos Aires*

I-79547

liquidación de la Tasa por Servicios Generales que se hubiese aplicado durante el año 2024 o fuera a aplicarse en el futuro como consecuencia del ejercicio por el Departamento Ejecutivo de la atribución prevista en el art. 143 de la ordenanza 30.645 (arts. 195, 199, 230, 232, CPCC).

Ello, con suspensión del traslado de la demanda y previa caución juratoria de la interesada. Para su cumplimiento, líbrese oficio por Secretaría.

Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).



Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 14/11/2024 18:59:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ

Funcionario Firmante: 15/11/2024 09:59:05 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ

Funcionario Firmante: 15/11/2024 12:56:56 - KOGAN Hilda - JUEZA

Funcionario Firmante: 20/11/2024 10:19:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ



Suprema Corte de Justicia
Provincia de Buenos Aires

I-79547

Funcionario Firmante: 20/11/2024 13:40:10 - MARTIARENA Juan Jose -
SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



226800290005132631

**SECRETARIA DE DEMANDAS ORIGINARIAS - SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA**

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el
20/11/2024 13:45:03 hs. bajo el número RR-914-2024 por DO\jmartiarena.